



## Vueltas y revueltas de la derecha peruana en el siglo XXI

*Turns and revolts of the Peruvian Right in the XXI Century*

**Gina Paola Rodríguez\***

### Palabras clave

Derechas  
Tecnocracia  
Autoritarismo  
Conservadurismo  
Perú

### Keywords

*Rights*  
*Technocracy*  
*Authoritarianism*  
*Conservatism*  
*Peru*

### Resumen

En este artículo caracterizamos tres fuerzas de derecha que se disputan la escena política peruana actual, identificando el sistema de representaciones a través del cual buscan su arraigo popular y electoral y problematizando sus crisis y recomposiciones. Se identifican tres tendencias o sectores: la derecha autoritaria y populista liderada por Keiko Fujimori; la derecha tecnocrática encarnada en funcionarios de Estado e ideólogos de diversos *think tanks*; y la derecha conservadora y religiosa que, aunque no tiene una organización partidaria propia, goza de un poder de lobby y convocatoria que le ha permitido el ingreso en la agenda pública, la política parlamentaria y el Ejecutivo subnacional.

### Abstract

*In this article, we characterize three Right forces that dispute the current Peruvian political scene, identifying the system of representations through which they seek their popular and electoral roots, and problematizing their crises and recompositions. Three tendencies or sectors are identified: the authoritarian and populist Right, led by Keiko Fujimori; the technocratic Right embodied in State officials and ideologists of various Think Tanks; and the conservative and religious Right that, although does not have its own*

\*Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Santa Rosa, Argentina/ Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina (GESHAL). Contacto: paolitarodriguez@yahoo.com

*party organization, has a lobbying and convening power that has allowed it to enter the public agenda, parliamentary politics and the subnational executive.*

**E**n marzo de 2018 Perú ingresó al club de países en los cuales una abrupta interrupción del mandato presidencial no le sigue una ruptura del sistema democrático. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se produjo tras las denuncias del partido fujimorista Fuerza Popular sobre una presunta compra de votos a legisladores para evitar su destitución por supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht. En su ausencia, el vicepresidente Martín Vizcarra asumió como nueva cabeza del ejecutivo con el propósito de restablecer la gobernabilidad perdida a lo largo de veinte meses de gestión de PPK y adelantar las reformas estructurales requeridas para retomar la senda de crecimiento económico de la última década.

Lejos de marcar un fin de ciclo, la dimisión de PPK fue solo una etapa más en la larga carrera por la hegemonía que mantiene enfrentados a distintos sectores de la derecha peruana. Por un lado, la derecha autoritaria y populista liderada por Keiko Fujimori, quien busca heredar el capital político del exdictador arquitecto de la “pacificación” y la reforma neoliberal en el Perú. Por otro, la derecha tecnocrática que, a través de funcionarios e ideólogos de diversos *think tanks*, representa los intereses de una élite económica transnacional preocupada por llevar las reformas de ajuste estructural hasta sus últimas consecuencias. En tercer lugar, una derecha de corte religioso y conservador que, si bien no cuenta con una organización partidaria propia, goza de un poder de lobby y convocatoria que le ha permitido el ingreso a la política nacional a raíz de los debates suscitados por temas como los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de derechos a la diversidad de género.<sup>1</sup>

Este esquema de las distintas expresiones de la derecha peruana merece complejizarse con una lectura transversal del sistema de alianzas que ha inclinado la balanza en favor de unas u otras en distintas coyunturas y en el que tienden a desdibujarse las diferencias que en un comienzo parecían tajantes. Para no ir muy lejos, vale la pena re-

<sup>1</sup> Resta por analizar en un futuro artículo, una cuarta tendencia, la del Partido Aprista Peruano, con Alan García como líder histórico que ha sabido comandar el paulatino corrimiento de la organización hacia la derecha, ubicándose hoy en las antípodas de sus orígenes socialistas. Los pormenores de esta transformación son de tal complejidad que su análisis exhaustivo merece un trabajo independiente.

trotraerse al tipo de representaciones que circularon en torno a la figura de PPK en tiempos de la campaña presidencial que lo enfrentó a Keiko Fujimori. En aquel entonces, la mayoría de los analistas coincidió en afirmar que se trataba de dos líneas de pensamiento y acción claramente distinguibles y arraigadas en tradiciones históricas diversas.<sup>2</sup> Sin embargo, una vez llevado al campo de la real politik, Kuczynski terminó acercándose al sector kenjista de Fuerza Popular para evitar su vacancia presidencial legando, en contraprestación, el “perdón médico” a Alberto Fujimori. Al mismo tiempo, el fujimorismo dista de ser un bloque político consistente, pues ha debido enfrentar sucesivas crisis internas producto de la pelea entre los hermanos Keiko y Kenji.

Tampoco son claros los límites que separan a tecnócratas, fujimoristas y apristas en relación al modelo económico y a la defensa de intereses de grandes empresas transnacionales. La continuidad neoliberal se daba por descontada cualquiera que fuera el resultado del ballottage de 2016 (entre PPK y Keiko), mientras que la participación de políticos, funcionarios y empresarios de todo el espectro político en el escándalo de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht terminó emparentando, en los hechos, a las derechas con la centro-izquierda de Alejandro Toledo y el etnocacerismo de Ollanta Humala. Líderes de todos los sectores investigados por cohecho, colusión y tráfico de influencias, así como por la recepción de dinero ilícito a favor de las campañas electorales presidenciales, dificultan la distinción de rasgos ideológicos a los ojos de la ciudadanía.<sup>3</sup>

El panorama de fragmentación y crisis política descrito hasta aquí coincide con la conmemoración del periodo más extenso de vigencia del sistema representativo en toda la historia del Perú (18 años) y, paradójicamente, con el momento de mayor descreimiento de sus ciudadanos en la política. Con miras a comprender este escenario, el presente artículo busca contribuir a la caracterización de las fuerzas de derecha en la disputa actual, identificando el sistema de representaciones a través del cual buscan su arraigo popular y electoral, al tiempo que

<sup>2</sup> Zapata, 2016; Jaramillo, 2016.

<sup>3</sup> Como señal de la indistinta participación de las fuerzas políticas en prácticas corruptas basta con ver la situación procesal de sus referentes: Ollanta Humala con comparecencia restringida por lavado de activos; Alejandro Toledo con orden de captura por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos; Pedro Pablo Kuczynski con impedimento de salida del país y bajo investigación por supuesto conflicto de intereses y corrupción cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo; Alan García bajo investigación por coimas que recibieron funcionarios de su segundo gobierno por la obra el metro de Lima; y Keiko Fujimori, investigada por financiar su campaña electoral del 2011 con dinero ilícito.

intenta dar cuenta de las crisis y recomposiciones, vueltas y revueltas, de este sector tan conflictivo como heterogéneo de la política peruana.

### La derecha autoritaria y clientelar

El último round del enfrentamiento entre los hermanos Fujimori probablemente decante en la expulsión de Kenji y dos de sus diputados adeptos del Congreso de la Nación por la causa que los vincula a la venta de votos para evitar la vacancia del expresidente Kuczynski. Esta no es del todo una victoria para la lideresa de Fuerza Popular, teniendo en cuenta su creciente descrédito entre la ciudadanía. Según la última encuesta nacional urbano-rural de la consultora GFK, Keiko Fujimori engrosa la terna de políticos que mayor rechazo genera entre los peruanos (72%) junto con su hermano Kenji (72%) y el aprista Alan García (82%).<sup>4</sup> No obstante su popularidad en picada, el poder de fuego de Keiko y Fuerza Popular dentro del Congreso y sobre otras ramas del poder público está lejos de extinguirse. Tras lograr la renuncia de PPK, su dominio se consolida a través del hostigamiento legal, discursivo y mediático a cualquier sector opositor, en prácticas que no solo evocan las formas más oscuras del fuji-montesinismo, sino que rehabilitan y actualizan su retórica autoritaria y contrainsurgente.

En un contexto de colapso del Estado, crisis económica y violencia política, el régimen de Alberto Fujimori operó una reconfiguración autoritaria del orden que actuó en contra de la afirmación de las instituciones democráticas. Al momento de su candidatura a la presidencia, se cumplía una década del conflicto armado que enfrentaba al Estado peruano con la insurgencia maoísta del PCP-Sendero Luminoso y el país atravesaba por una grave crisis de representación que abría el paso a las candidaturas "independientes". El candidato Mario Vargas Llosa y su liberalismo exacerbado generaban rechazo entre las capas medias y populares, por lo que el discurso antipolítico de Fujimori hizo hincapié en la apelación a los sectores informales y la defensa de medidas heterodoxas, así como en su carácter de outsider de los sectores políticos y económicos dominantes. Una vez llegado al poder, y descargado de las promesas de campaña, Fujimori buscó estar en sintonía con los empresarios, las Fuerzas Armadas y las autoridades norteamericanas que, en un principio, dudaban de su capacidad para representarlos y conducir en consecuencia el destino del país. El gestor de estas sinergias fue el flamante asesor presidencial, excapitán del Ejército y abogado, Vladimiro Montesinos.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *La República* (1 de julio de 2018).

<sup>5</sup> Jara, 2017, p. 97.

No sin dificultades, Fujimori consiguió el respaldo necesario para gobernar en torno a un proyecto que buscaba restaurar el orden social y político desafiado por la insurgencia, al tiempo que reestructurar las relaciones Estado-sociedad de acuerdo con la matriz neoliberal. El primer objetivo requirió un estrechamiento de los lazos con los militares que se concretó en la reorganización de los aparatos castrenses, aumentado exponencialmente sus prerrogativas, y en la revisión de la estrategia seguida contra Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) según los parámetros de la guerra contrasubversiva.<sup>6</sup> Dicha revisión implicó un protagonismo inédito de las actividades de inteligencia<sup>7</sup> (en las que Montesinos fungió como poder en la sombra y enlace con las Fuerzas Armadas) así como la ejecución de una política exterior que subordinaba la hipótesis de guerra con los países vecinos a la victoria en el frente interno. Las nuevas disposiciones tomaron forma legal en la promulgación de más de 20 decretos presidenciales sobre pacificación y defensa nacional que expresaban las aspiraciones de los sectores hegemónicos de las FFAA.<sup>8</sup>

Por otra parte, si bien el modelo neoliberal ya se había echado a andar desde los gobiernos de Morales Bermúdez (1975-1980) y Belaúnde Terry (1980-1985), fue la crisis de la propuesta "nacional, popular y democrática" de Alan García (1985-1990) (que degeneró en un régimen corrupto y clientelar ambientado en la peor crisis económica de la historia peruana) la que allanó el terreno para la imposición de un régimen de libre mercado más agresivo y profundo. El Perú se vio afectado por una

<sup>6</sup> Estos parámetros están condensados en el Manual del Ejército Peruano de 1989 "Guerra no convencional. Contrasubversión", donde a partir de las evaluaciones y análisis de lo que había sido hasta entonces la lucha contra la subversión, se identifican y tratan de corregir errores estratégicos y se definen "las leyes, características, objetivos y fundamentos" de la lucha contrasubversiva que se libraba en el país. Tapia, 1997.

<sup>7</sup> El Servicio de Inteligencia (SIN) amplió enormemente su grado de influencia política, al concentrar no solo la información relacionada con los movimientos de los grupos insurgentes, sino al tener incumbencia en materia de tráfico de drogas ilícitas y acciones de espionaje a la oposición.

<sup>8</sup> "La nueva Ley del Sistema de Defensa Nacional (Decreto Legislativo 743/ 91) (...) adecua el aparato del Estado al enfrentamiento del fenómeno subversivo, es decir, para el conflicto interno (...) [dejando] el verdadero poder de planificación y ejecución de las acciones políticas y militares se encontraba en manos de las FFAA. Se promulgaron también normas que legalizaban la ampliación de las facultades de las FFAA, tales como la posibilidad de ingresar en determinadas circunstancias a zonas no declaradas en estado de emergencia, así como a penales y universidades donde ya habían intervenido. Se legalizaba, asimismo, el armamento de Comités de Defensa Civil y su participación en las acciones antisubversivas." Degregori y Rivera, 1993, p. 16.

grave hiperinflación y los ingresos fiscales cayeron al punto de detener el funcionamiento del Estado y con el aparato productivo en ruinas se produjo la eclosión de un inmenso sector informal que desconocía y desacataba las normas oficiales y convencionales. La indiscriminada represión militar, justificada en la amenaza del terrorismo y el narcotráfico, generó un clima de desorden, temor e incertidumbre generalizados.<sup>9</sup>

Con Fujimori en el poder, el proceso de “ajuste y estabilización” incluyó medidas conocidas como la apertura de la economía, la flexibilización de las relaciones laborales, el inicio de la privatización de las empresas públicas, el rescate del sistema financiero y la negociación del pago de la deuda externa con miras a recuperar la confianza empresarial, favorecer el repunte de las inversiones y el crecimiento económico según la receta neoliberal. La adopción de estas medidas le valió a Fujimori la aprobación y halago de los sectores financieros y los organismos multilaterales, así como el respaldo de empresarios, intelectuales y congresistas liberales por el reciente ingreso del Perú al club de países “emergentes”.

No obstante haber recibido la aprobación del Congreso para emitir decretos legislativos y lograr ciertos acuerdos con la oposición, Fujimori y los mandos militares llevaron a cabo un “autogolpe” en abril de 1992, desnudando la naturaleza castrense y autoritaria del régimen. En la etapa que se extendió hasta 1997, el programa de gobierno se concentró en la reafirmación del poder estatal a través de las fórmulas anteriormente descritas: implementación de medidas de ajuste estructural en lo económico y lucha antisubversiva feroz en lo político. Pero pronto fue evidente que la decisión del golpe hundía sus raíces en motivos de otra clase. Según Cotler, estos incluían la manifiesta hostilidad contra la “partidocracia”, la convicción acerca de la necesidad de una “mano dura” que disciplinara a la sociedad y condujera el país a buen puerto, y el interés militar por eliminar la injerencia de los dirigentes políticos en el gobierno del país.<sup>10</sup> Nosotros agregaríamos uno más: la ambición desmedida de Fujimori y Montesinos que derivó en una cooptación de los recursos económicos e institucionales del Estado con fines patrimoniales. Así, en la segunda etapa del régimen, que se circunscribe desde finales de los noventa hasta su colapso en el año 2000, se produjo una excesiva concentración del poder en una pequeña camarilla liderada por Montesinos, que además de asumir el control casi total del poder estatal con fines de enriquecimiento personal, recurrió a métodos mafiosos para garantizar la impunidad de sus crímenes y su mantenimiento en el poder. El SIN extendió sus incumbencias para auscultar a la opinión

<sup>9</sup> Sobre el régimen ver Cotler y Grompone, 2000; Burt, 2009; Degregori, 2016.

<sup>10</sup> Cotler y Grompone, 2000, p. 29.

pública, hostigar a la oposición, adelantar operativos psico-sociales y todo tipo de medidas represivas para la preservación del régimen. Solo en coyunturas electorales se permitió la formación de movimientos transitorios de apoyo al gobierno, descartando cualquier posibilidad de una organización partidista que pudiera disputar el liderazgo al presidente.

La lucha librada contra Sendero Luminoso alcanzó a los modelos de organización social que se desarrollaban a nivel local y regional. Tal es el caso de la represión contra la coalición democrática de Izquierda Unida (IU) o el asesinato de líderes sociales (a través de organizaciones paramilitares como el Comando Rodrigo Franco o el Grupo Colina), que no solo buscó socavar la capacidad de alianzas entre SL y los pobres urbanos y rurales, sino también silenciar, castigar y vencer por la vía del miedo a la sociedad peruana en su conjunto, eliminando cualquier esfuerzo organizado que se opusiese al proyecto fujimorista. Como asevera Burt, "(...) el miedo se incrustó en la mentalidad de los peruanos. En una sociedad en la cual la segmentación social por raza y clase es de por sí profunda, el miedo exacerbó la sospecha del 'otro' y devino en un rasgo que definía la vida cotidiana."<sup>11</sup>

En contraste con las experiencias dictatoriales de Centroamérica y el Cono Sur, la responsabilidad en los casos de victimización en Perú es compartida por el Estado y la insurgencia. Como puede leerse en las conclusiones del Informe de la Comisión de la Verdad ambos sectores minaron las identidades colectivas, destruyeron las bases materiales y morales requeridas para la organización social e inocularon una cultura del miedo que aún se respira entre los peruanos.<sup>12</sup> Además, dieron pie al involucramiento activo de civiles en la lucha contrainsurgente a través de la creación de Comités de Autodefensa (CADs), formados en ocasiones como único medio de defensa frente a Sendero Luminoso, pero, en otro buen número de casos, por la presión e intimidación de las fuerzas armadas o de otros CADs. En medio del fuego cruzado, las organizaciones de familiares de víctimas y los defensores de derechos humanos que buscaron denunciar y resistir a la violencia fueron decretados enemigos por los bandos en disputa y privados de todos sus derechos.

Si bien estas prácticas de amedrentamiento se hallaban presentes antes de la llegada de Fujimori, aquello esencial a su mandato fue la construcción de un "consenso autoritario" en un ejercicio combinado de instrumentalización del miedo, reorganización simbólica de la sociedad y clientelismo. El primer factor buscó acentuar el contexto de crisis interna para

<sup>11</sup> Burt, 2009, p. 38.

<sup>12</sup> CVR, 2003.

justificar la ruptura de la normalidad y la aceptación de un “sentido común” favorable a soluciones de “mano dura” y suspensión de la ley como únicas vías de salida a la violencia y el caos económico. Al hecho de espectacularizar el acecho senderista (que para entonces ya había dado su salto de la sierra a la capital), le acompañó la producción de un discurso acerca de los peligros de volver a un pasado de violencia, estancamiento económico y caos, con el que se reforzaba la necesidad histórica del fujimorismo ante la ausencia de alternativas en el resto del arco político.

La reorganización simbólica, por su parte, tuvo como soporte a los canales de televisión y otros medios de comunicación hegemónicos como la prensa “chicha”, que no solo hicieron aceptable la resolución privada de los asuntos públicos (a través de prácticas de justicia por mano propia, por ejemplo), sino que además justificaron la completa deshumanización de la oposición (civil y armada), en un discurso maniqueo que estrechó la vigencia de los derechos humanos y la democracia asimilando a sus defensores y reclamantes como “servidores” del terrorismo. El presidente en persona se ocupó de desacreditar a quienes denunciaban violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, aduciendo que eran falsas o que “(...) minaban la moral del personal castrense en su lucha contra la subversión”.<sup>13</sup>

Finalmente, el clientelismo, concretado en un gasto social expansivo orientado a las necesidades de los más pobres (construcción de caminos, escuelas, puentes y vivienda), terminó de sentar las bases de un liderazgo neopopulista en el que Fujimori cultivaba un vínculo directo con las masas presentándose como “el Chino” de la gente. En efecto, el Ministerio de la Presidencia concentraba el 25% del presupuesto estatal destinado al combate de la pobreza, en contra del 3% asignado a los gobiernos locales, en una política orientada a ganar el respaldo de los sectores más deprimidos de la escala social. Programas de asistencia a las mujeres más pobres, donación de alimentos, materiales de construcción y animales, hicieron parte de un programa que pretendía privilegiar la democracia social por encima de la democracia política.

Con todo y el mecanismo autoritario-clientelar aceitado, la caída del régimen de Fujimori fue un proceso que comenzó a gestarse en 1996 tras la controversia generada por la aprobación de la Ley de Interpretación

<sup>13</sup> Así, por ejemplo, en la ceremonia por el día de las Fuerzas Armadas el 24 de septiembre de 1991 el presidente afirmó: “Sabemos que los terroristas y sus organizaciones de fachada, o tontos útiles, no se rendirán y utilizarán todos los medios posibles para dañar la imagen del Perú con el pretexto de que las fuerzas armadas violan sistemáticamente los derechos humanos.” (Burt, 2009, pp. 330-331).

Auténtica, que habilitaba su segunda reelección, y se extendió más allá de la impugnación de las elecciones del año 2000 en las que fue candidato único. A las denuncias de fraude electoral elevadas por la oposición se sumaron dos escándalos que desencadenaron el colapso. Por un lado, el involucramiento de Fujimori y Montesinos en un intercambio de armas por drogas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por otra parte, la difusión del primero de muchos videos en los que se registraba a Montesinos sobornando a un congresista de la oposición para que diera su apoyo al fujimorismo. Si bien los escándalos fueron un bochorno para la sociedad peruana y un descrédito irreversible para el fujimorato, su ocurrencia no termina de explicar la caída del régimen. La erosión paulatina de su legitimidad puede rastrearse hasta 1997, año de movilización y organización de la sociedad civil contra la decisión parlamentaria de disolver el Tribunal Constitucional por oponerse a la aprobación de la Ley de Interpretación Auténtica. Para los comicios del 2000 ya eran numerosos los antecedentes de movilización callejera. A los indignados por el fraude electoral se sumaron los descontentos por los efectos empobrecedores del modelo económico, la represión indiscriminada y la violación sistemática de derechos humanos. Las protestas profundizaron las divisiones al interior de la coalición gobernante dificultando su capacidad para mantener el control sobre el proceso político, mientras que la reverberación de la protesta interna a nivel internacional, particularmente en la OEA y el departamento de Estado norteamericano, terminó de agudizar las contradicciones y marcó la insostenibilidad del régimen.

Fujimori presentó su renuncia a la Presidencia del Perú el 22 de noviembre del 2000 a través de un fax enviado desde Japón. Allí se mantuvo fugitivo durante cinco años, hasta que decidió viajar a Chile desde donde fue extraditado en 2007 por los casos de violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción durante su gobierno. A la pena de seis años por el delito de usurpación de funciones en el allanamiento de la vivienda de Vladimiro Montesinos, se le sumaron, en 2009, 25 años de cárcel como actor mediado en el asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y la Cantuta (1992) a manos del grupo paramilitar Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. Ese mismo año empezó la recolección de firmas para la inscripción de Fuerza 2011, partido liderado por su hija, Keiko Fujimori, que presentaría candidatos a las elecciones presidenciales, regionales y congresales.

### **¿Fujimorismo renovado?**

El recorrido por la historia del régimen fuji-montesinista permite comprender en mejor medida el liderazgo de Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) dio el salto a la política en 2006 cuando obtuvo la mayor votación en las elecciones parlamentarias. En aquel entonces, su desempeño como congresista fue más bien discreto y

moderado políticamente: mantuvo el diálogo con el APRA y fue soporte del gobierno de turno en varios procesos legislativos, no presentó ningún proyecto de ley relevante, y gozó de licencias por maternidad y estudios la mayor parte del tiempo. Sin embargo, se mantuvo en el país en tiempos en los que su padre emprendía la huida, teniendo que enfrentar a las comisiones que indagaban el origen de los recursos que le permitieron estudiar en el extranjero. Este fue el momento para elevar su perfil y convertirse en la cara visible de la segunda generación del fujimorismo.

Cuánto del legado de su padre ha mantenido y cuánto de este logra capitalizar en las urnas son cuestiones a estudiar. Si observamos la herencia política del exdictador, la posición de Keiko ha sido de defensa estricta de lo actuado por su padre y condena de lo operado por su asesor, Vladimiro Montesinos. En su relato, la corrupción y las violaciones de derechos humanos son responsabilidad exclusiva del exjefe de inteligencia, mientras que la falta de Fujimori fue el exceso de confianza en su mano derecha: “Mi padre cometió el grave error político de mantener a Vladimiro Montesinos hasta el final de su gobierno.”<sup>14</sup>

La retórica negacionista está en la médula ideológica de Fuerza Popular, que insiste en la inocencia de Fujimori en todos los casos juzgados de corrupción y violaciones de derechos humanos. Además, se expresa en las disputas por la memoria del pasado reciente en el Perú, cuyo sentido y significado no ha sido fijado a quince años de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).<sup>15</sup> A esas discrepancias, muchas veces públicas, subyacen significados distintos de justicia y también visiones y recuentos diferentes de lo que fue la guerra.<sup>16</sup> Así, resultan ilustrativos dos debates recientes: la diatriba por los casos de esterilización forzada de más de 250 mil mujeres en la década del noventa y la confrontación en torno a los objetivos y contenidos del Lugar de la Memoria (LUM) con sito en la ciudad de Lima.

Han pasado más de tres décadas desde la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) que, entre 1996 y 2000, produjo la esterilización masiva y no consentida de mujeres, en su mayoría pobres, analfabetas, indígenas y de reciente

<sup>14</sup> *El Comercio* (31 de enero de 2016).

<sup>15</sup> “La sentencia de Barrios Altos y La Cantuta fue preparada antes de que él fuera condenado y mientras él estaba en el extranjero. Nosotros creemos en la inocencia de Alberto Fujimori, pero a la vez señalamos que él tuvo una gran responsabilidad política como presidente, al haber permitido que estos hechos de corrupción sucedieran (...)”, aseguró Keiko al diario *El Comercio* en enero 2016.

<sup>16</sup> Ilizarbe, 2015, p. 237.

procedencia rural.<sup>17</sup> El programa fue parte de las políticas de “modernización” del sector de la salud incluidas en el modelo neoliberal de Fujimori, en cuyo diagnóstico se consideró que el crecimiento poblacional era uno de los factores limitantes para el desarrollo económico del país, haciendo de la planificación familiar una prioridad de gobierno.<sup>18</sup> A partir de la revelación de que las esterilizaciones quirúrgicas fueron llevadas a cabo de manera involuntaria, la denegación fujimorista no se hizo esperar. La politóloga María Cecilia Villegas publicó un libro con un discurso pretendidamente académico, *La verdad de una mentira: El caso de las 300 mil esterilizaciones forzadas*, en el cual asevera que se trata de un mito creado por las organizaciones feministas en alianza con la Iglesia Católica y los sectores conservadores, para “(...) incorporar una acusación capaz de impactar en la lista de cuestionamientos al régimen fujimorista sin detenerse a pensar que ese afán político estaba destruyendo una adecuada política pública que el país necesitaba y sigue necesitando.”<sup>19</sup>

Aunque Villegas ha remarcado su no pertenencia al fujimorismo, su obra ha servido de insumo a los sectores que buscan deslindar al régimen de cualquier responsabilidad en la violación de derechos humanos y presentar los casos denunciados como hechos aislados. En 2016 se archivó la denuncia por la presunta autoría mediata de Fujimori y sus exministros de salud, responsabilizando a los médicos y al personal de salud involucrado en siete casos. Sin embargo, la lucha de las víctimas continúa con

<sup>17</sup> Según la investigación de Ballón, 2014, “(...) si bien la campaña de esterilización estaba dirigida tanto a varones como a mujeres, se focalizó en el público femenino de bajos recursos, con propagandas que alentaban a la esterilización como el método correcto de contracepción. La ‘información’ que recibían las mujeres por parte de los profesionales de la salud eran muchas veces incomprensibles para las poblaciones que no hablaban castellano (poblaciones de habla quechua y aymara) o no se usaba ni explicaba el término ‘esterilización’ sino el de ‘Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria’ (AQV). Las personas que se sometían o que eran sometidas a la fuerza, no conocían los alcances de esta operación”.

<sup>18</sup> Como describen Miranda y Yamin, 2008: “[I]a meta era reducir la tasa de crecimiento poblacional anual a una cifra alrededor de 1,17 para el período 1995-2000. Dicho indicador mostraba un descenso progresivo que se había iniciado en las décadas anteriores, siendo 2,8 en el período 1961-1972, 2,0 entre 1981-1993, alcanzando 1,7 entre 1993-2002, incluyendo este último el período de gobierno de Fujimori. En otras palabras, el esperar la tendencia de reducción del crecimiento poblacional de acuerdo a las tendencias observadas no sería suficiente. Entonces, la meta sería por el contrario acelerar el proceso. El mismo Fujimori tomó un interés personal en tal programa y, como cualquier plan que necesita mostrar resultados, algunas metas fueron establecidas para poder monitorear los avances y evaluar los logros de este programa, entre ellas el número de mujeres esterilizadas. Ha sido indicado que el proceso de monitoreo era implementado desde el mismo Palacio de Gobierno (...)”.

<sup>19</sup> Villegas, 2017.

el pedido de intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para sendos sectores de la sociedad, así como para organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, la política de esterilizaciones forzadas no fue un conjunto de hechos aislados adjudicables a médicos inescrupulosos, como busca hacer creer este libro, sino que "(...) fue pensada y diseñada desde el principio con metas específicas que se tenían que cumplir solo para el método de esterilizaciones (...) Todo esto pasó y de todo esto hay pruebas; sin embargo, la autora las omite o no las presenta de manera completa".<sup>20</sup>

El otro caso paradigmático en las disputas por la memoria reciente, y en el que se advierte con mayor fuerza el interés fujimorista por fijar una escritura de la historia en clave contrainsurgente, es la polémica abierta en torno al propósito y funciones del Lugar de la Memoria (LUM), un espacio de conmemoración pedagógico y cultural que alberga la historia de violencia ocurrida en el Perú entre 1980 y 2000. El primer antecedente fue el pedido de renuncia a su director, Guillermo Nugent, en agosto de 2017, por "permitir" la exposición de la retrospectiva Resistencia Visual 1992, una reflexión sobre este año desde la mirada de 36 artistas gráficos, colectivos y activistas. El pedido de renuncia se debió a las críticas que congresistas de la bancada fujimorista hicieron a la muestra por considerar que tenía un contenido sesgado y descontextualizado acerca de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori. A este "llamado de atención", le siguió en tiempos recientes el ataque virulento del excomandante del Ejército y ahora congresista por Alianza Popular, Edwin Donayre, quien acusó al LUM de hacer apología al terrorismo y no incluir dentro de su exposición nada que describa el valor de los militares que combatieron a Sendero Luminoso. Como corolario de su denuncia, la persona que guiaba la visita de Donayre fue separada de su cargo y el congresista solicitó la reestructuración del Lugar de la Memoria. Cabe recordar que el LUM nació como parte de una política estatal que buscó responder a la exigencia de las víctimas y sus familias de reconocer los hechos violentos ocurridos durante dos décadas de conflicto armado y sus consecuencias para la sociedad peruana. Los hechos de violencia son contados tal como fueron expuestos en documentos oficiales como el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y ratificados por sentencias emitidas por el sistema de justicia. De ahí que la acción del congresista Donayre deba ser leída como parte de la estrategia negociacionista que aglutina a distintos grupos y líderes de opinión vinculados al fujimorismo y a sectores de las fuerzas armadas responsables de graves violaciones a los derechos humanos, que se proponen ocultar los he-

<sup>20</sup> Vidal Carrasco, 2017.

chos ocurridos durante el conflicto armado e imponer una versión de la historia peruana compatible con la impunidad y la comisión de delitos.

Más allá de la coyuntura, las polémicas por las esterilizaciones forzadas y los intentos de criminalización del LUM se inscriben en el objetivo mayor de consolidar una memoria heroica y salvadora del Fujimori: gestor del milagro económico, en contraste con los tiempos de pobreza e hiperinflación de los gobiernos anteriores, y pacificador del Perú que, junto a las Fuerzas Armadas, restauró el orden y la tranquilidad acachados por el terrorismo. Una memoria en la que la desigualdad y la exclusión de amplios sectores de la población, las violaciones masivas de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no pasan de ser efectos colaterales, casos aislados o excesos esporádicos de agentes estatales que desviaron su conducta. Hasta hoy, el relato de un futuro moderno y de abundancia desprendido de un pasado de miseria y caos orienta la retórica de la derecha fujimorista y sus aliados no solo como método para esquivar sus deudas con la justicia, sino también como estrategia para enfrentar y descalificar a sus enemigos políticos.

Keiko Fujimori ha querido marcar diferencias con su padre como una ciudadana respetuosa del estado de derecho: “[Yo] de ninguna manera hubiera cerrado el Congreso.”<sup>21</sup> Pero esta vocación democrática hace agua en cada intento destituyente de los poderes públicos emprendido por Fuerza Popular. Entre tanto, la realización simbólica del fujimorismo se actualiza en un discurso que explota el miedo arraigado entre los peruanos tomando como bandera el tema de la inseguridad. Dentro de los proyectos de ley presentados por la lideresa en el Congreso se encuentran la incorporación de la pena de muerte para violadores de niños y el castigo severo de la pornografía infantil. La delincuencia es el nuevo “otro” que, en todo caso, no termina de desplazar al “terrorismo”, ese fantasma útil a los fines de descalificar a todo aquel que controvierte o desoye al fujimorismo. Tal vez aquí radique el mayor legado de albertismo: una sociedad altamente polarizada, con un sistema de partidos erosionado y unas instituciones desacreditadas que restan fe a la democracia para alimentar un populismo punitivo altamente eficaz. Queda por ver si Keiko reactivará el imaginario paterno de líder fuerte y generoso que entregaba regalos a los pobres, mientras “ajusticiaba” a los terroristas.

Por lo pronto, la cabeza de Fuerza Popular busca mostrarse como una renovación superadora: “Sé mirar a la historia de mi país. Sé qué capítulos se deben repetir y sé muy claro cuáles no”;<sup>22</sup> una lideresa llama-

<sup>21</sup> *El Comercio* (31 de enero de 2016).

<sup>22</sup> Aquino, 2016.

da a suspender las diferencias y apostar por la “reconciliación”, nuevo eufemismo para ocultar una política de impunidad y olvido que niega la responsabilidad política y penal por los crímenes cometidos por el fujimorismo y desconoce el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. La mentada renovación no pasa de ser un relevamiento parcial de personajes históricos del albertismo que no se acompaña por una transformación en las prácticas. Si bien la vieja guardia fue excluida de la lista parlamentaria de Fuerza Popular en 2011 (cuando se procedió al reclutamiento de figuras sin pasado fujimorista) y la actual dirigencia tiene menos vínculos con Alberto Fujimori, el régimen de los noventa y los militares; Fuerza Popular, como la mayoría de los partidos peruanos, está compuesto cada vez más por políticos sin experiencia, indisciplinados y corruptos.<sup>23</sup>

Finalmente, interesa analizar la vigencia de la relación entre el fujimorismo y los sectores populares. Según Zapata, mientras que Alberto Fujimori fue un populista de derechas, que tenía la llave del clientelismo y ahí ubicaba su soporte político, Keiko Fujimori pretende girar a un liberalismo más aséptico, menos impregnado de clientelismo, desmarcarse de la estirpe populista de su padre para abrazar un modelo más ortodoxo.<sup>24</sup> En continuidad con el fujimorato, el arraigo de Fuerza Popular entre los sectores más pobres se mantiene. Según una encuesta realizada por IPSOS Perú en la víspera del balotaje presidencial de 2016, los votantes de Keiko pertenecían principalmente a los sectores socioeconómicos D y E, donde alcanzaba un 47% de respaldo.<sup>25</sup> Los electores de PPK, en contraste, pertenecían principalmente a los sectores A y B, con un ingreso familiar mensual de entre 1.562 y 3.437 USD.<sup>26</sup> A diferencia de PPK, quien era respaldado principalmente por varones, los votantes de Keiko eran en su mayoría mujeres (44%) y personas menores de 40 años (casi 60%), aun cuando la candidata en absoluto incluye en su ideario principios cercanos a la paridad de género.

Teniendo en cuenta que Keiko aún no cuenta con antecedentes de gestión que permitan medir su desempeño en materia de política social, es difícil medir su apego estricto a la ortodoxia económica. Su Plan de Gobierno para las elecciones 2016 se destaca por la interpelación a los sectores campesinos e informales que no encuentran espacio para desarrollar sus proyectos:

---

<sup>23</sup> Levitsky, 2016.

<sup>24</sup> Zapata, 2016, p. 127.

<sup>25</sup> Se trata de los sectores con un ingreso familiar mensual que oscila 468 y 718 USD y con una tasa de desocupación de entre el 33% y el 35%, APEIM, 2016.

<sup>26</sup> *El Comercio* (Lima), 19 de abril de 2016.

“Las comunidades campesinas, los mineros informales, los pescadores artesanales, y en general todos los emprendedores (...) no se encuentran en contra del progreso, como algunos se han atrevido a sostener, sino que no han encontrado mecanismos para que sus intereses sean realmente representados en las decisiones de política pública. Todos ellos no son sino los mismos peruanos que han visto un Estado que se ha ido alejando de ellos, que se ha dedicado a promover ciertos sectores empresariales con el argumento de que solo las grandes inversiones traen el crecimiento al país.”<sup>27</sup>

Para analistas como Tafur, tras la intención de representar políticamente al mundo emergente, el fujimorismo disimula su coqueteo con grupos económicos que por su propia naturaleza delictiva deben estar necesariamente fuera de la legalidad sin que el Estado busque incorporarlos, sino más bien desactivarlos. Así, por ejemplo, insiste Tafur, “(...) la oposición de Fuerza Popular a que la Superintendencia de Banca y Seguros supervise la actividad de supuestas cooperativas –muchas de ellas asentadas en zonas de trasiego de drogas– no es la primera ocasión en que demuestran ese proceder limítrofe”.<sup>28</sup> Ya antes lo han hecho con los mineros que destruyen el ambiente o acuden a la trata y la esclavitud laboral, o con la aceptación en su partido de miembros vinculados con el narcotráfico, etc.

En una fórmula que persigue un imposible equilibrio, la retórica de Fuerza Popular busca compatibilizar la economía informal con el gran empresariado nacional y transnacional. Según Keiko, “(...) si bien dichos sectores traen inversión y crecimiento, y en algunos casos muy encomiables, traen además innovación, productividad y empleo de calidad, el modelo no ha logrado garantizar la equidad perseguida con el fin de que el crecimiento beneficiara también a todos aquellos que se sienten excluidos.”<sup>29</sup> En tiempos de campaña, el nexo de Keiko con las provincias se produjo a través de nuevos empresarios que representaban el ascenso económico de sectores antiguamente rezagados y veían en Fuerza Popular la oportunidad de ingresar en la arena política.

Resumiendo hasta aquí, podemos decir que las idas y vueltas del keikismo dan más cuenta de continuidades que de rupturas con el albertismo, siendo la principal la profusión de prácticas intolerantes y permeables a la ilegalidad como *modus operandi*. La principal ruptura, por otra parte, radica en la pérdida de mayorías ciudadanas que sustenten el modelo populista autoritario del Fuji-montesinismo. Aún sin un liderazgo

<sup>27</sup> Fuerza Popular, 2014, p. 4.

<sup>28</sup> Tafur, 2018.

<sup>29</sup> Fuerza Popular, 2014, p. 6.

definido a la cabeza, el antifujimorismo es un movimiento que gana cada vez más terreno y una línea que muchos políticos, tecnócratas y empresarios peruanos aún no están dispuestos a cruzar, sea por razones de principios o de imagen.<sup>30</sup> De este modo, la vitalidad de Fuerza Popular debe más al colapso de los demás partidos y a la debilidad de otros liderazgos que al desarrollo de un vínculo real con la ciudadanía.

## La derecha tecnocrática

La volatilidad política del Perú en las últimas dos décadas contrasta con una estabilidad macroeconómica e índices de competitividad internacional que le han valido el elogio mundial más allá de las falencias persistentes en temas como calidad educativa, distribución de la riqueza o inversión en ciencia y tecnología. El “milagro peruano” ha sido adjudicado a las bondades del ajuste estructural de 1990 y a la aplicación de las medidas del Consenso de Washington por parte de tecnócratas locales según los cánones de la “nueva gestión pública”.

El desplome del Estado desarrollista y sus indeseables consecuencias en la década del ochenta (hiperinflación, desempleo y pobreza) alimentaron el consenso en torno a la necesidad de mantener el modelo de libre empresa no solo como orientador de la economía, sino también como modo de organización del Estado y la sociedad. Al lado de empresarios y tecnócratas, buena parte de los sectores emergentes e informales del Perú comparten esta visión, nutrida y divulgada por *think tanks*, agencias de cooperación y medios de comunicación. Medidas como la privatización de los servicios públicos, las alianzas público-privadas y las políticas sociales focalizadas son hoy valores incuestionables para muchos peruanos.

En la base de este consenso se halla una transformación del sentido común que no es obra exclusiva de la crítica neoliberal al desarrollismo o su imperativo de reducción del Estado, sino que es el resultado de un nuevo modo de interpelar a las clases populares. En este marco, las ideas de economistas como Hernando de Soto, Enrique Ghersi y Mario Ghibellini cumplieron un papel central al incorporar en el relato nacional a los sectores más deprimidos de la economía, ya no desde su pertenencia a una clase social enfrentada a la burguesía, sino en condiciones de

<sup>30</sup> En el año 2016, coincidiendo con el aniversario del autogolpe de Estado que dio su padre el 5 de abril de 1992, decenas de miles de personas marcharon en más de veinte ciudades del Perú contra su candidatura convocada por la plataforma “Keiko no va”. Desde entonces el movimiento de descontento ha crecido más allá de la figura de Keiko para exigir en julio de 2018 la destitución de todos los jueces, concejales, mafiosos, corruptos del sistema judicial y político del país bajo el lema: “¡Que se vayan todos!”.

igualdad con esta, como emprendedores potenciales. Con un prólogo de Mario Vargas Llosa, *El otro sendero*,<sup>31</sup> propuso a finales de los ochenta la inclusión de la economía informal dentro de la historia ampliada del capitalismo en el Perú. Lejos de ser considerado como un problema, el sector informal fue visto como un instrumento para el desarrollo, siempre y cuando el gobierno lo eximiese de aquellos obstáculos que le impedían liberar y multiplicar sus energías empresariales. A partir de este razonamiento, De Soto buscó restaurar la cuestionable legitimidad del gran sector privado del Perú sosteniendo la insólita equiparación entre el poderoso sector empresarial y el vendedor ambulante itinerante como parte de una misma institución económico-social. Así descrita, la empresa capitalista estaría gobernada por las mismas fuerzas económicas que inexorablemente premian a los empresarios según su competitividad, y ambos tipos de empresa (la formal y la informal) serían simples variaciones de un mismo fenómeno. Este aire de familia es lo que las enrola en torno a un enemigo común: el Estado intervencionista, raíz del subdesarrollo, cuyo poder se esconde detrás de los mantras: planificar, fomentar, reglamentar y participar. Según De Soto, el alcance de la autoridad legal del Estado "(...) sobre la propiedad y las actividades económicas es prácticamente ilimitado, a tal punto que, en el sentido cabal de los términos, el Perú nunca ha sido un país de propietarios, sino a lo sumo de usufructuarios."<sup>32</sup> Por eso, en aras de la afirmación de los derechos de propiedad, la fiabilidad de sus transacciones y la seguridad a sus actividades, los peruanos debían pronunciarse a favor de "(...) un programa mínimo para integrar el país [que] requeriría necesariamente simplificar y descentralizar la función pública y, por fin, desregular –o despolitizar, si se quiere– la vida productiva nacional."<sup>33</sup>

Las ideas de Hernando de Soto encontraron eco en el gobierno de Fujimori, quien impulsó el crecimiento del Instituto Libertad y Democracia (IDL) como plataforma de captación de profesionales para la gestión pública. Los economistas se perfilaron, al decir de Conaghan como "las estrellas de la crisis" durante el primer mandato de Fujimori y, aunque vieron reducido su papel a medida que el autoritarismo fuji-montesinista copaba el Estado, lograron mantenerse en posiciones clave en el aparato público tras el regreso a la democracia.<sup>34</sup> Hasta comienzos de los años 2000, los objetivos de la tecnocracia se orientaron al manejo prudente de las cuentas fiscales, así como a una reestructuración de la economía hacia una mayor liberalización del mercado, otorgando más peso a la

---

<sup>31</sup> De Soto, 1986.

<sup>32</sup> *Ibidem.* p. 289.

<sup>33</sup> *Ibidem.* p. 301.

<sup>34</sup> Conaghan, 1988.

iniciativa privada. Sin embargo, promediando la primera década del siglo XXI las medidas de reducción del Estado y liberalización irrestricta de los mercados empezaron a ser motivo de división entre los funcionarios de Estado. Como explica Grompone en su investigación de las tecnocracias durante el gobierno de Ollanta Humala, un sector de tecnócratas (los neoliberales de centro o reformistas) comenzó a sentir más confianza en el papel del Estado percibiéndolo como un agente relevante en la senda del desarrollo.<sup>35</sup> Piero Guezzi, exministro de producción de Humala, fue parte del grupo que defendía un mayor rol del Estado en la economía, junto con economistas como Alonso Segura y Jaime Saavedra, asiduos columnistas del diario *El Comercio*, y David Rivera, director de la revista *Poder*, entre otros. Este moderado cambio de orientación –argumenta Grompone– no sería exclusivo de los tecnócratas del gobierno de Humala, sino una tendencia de la región e incluso global, que puede rastrearse en los informes del Banco Mundial en los que se insta al Estado peruano a tener como ejes de acción la reducción de la pobreza y la desigualdad, el acceso a los servicios básicos y la sostenibilidad ambiental.<sup>36</sup> En la vereda contraria a los tecnócratas reformistas o de centro, se halla aquel sector que plantea que la única manera de alcanzar las metas recomendadas por el BM es el crecimiento económico: “la fórmula es crecer, progresar como país y luego incluir”,<sup>37</sup> sostendrán economistas como Roberto Abusada, del Instituto Peruano de Economía.

Aun cuando existan posiciones encontradas en torno al grado de intervención estatal en la economía, la tecnocracia peruana coincide en la constante búsqueda de la eficiencia en los instrumentos de gobierno. La convicción de que la aplicación de técnicas y criterios de medición mejoran por sí mismos el desempeño del Estado atraviesa la visión de estos fieles de la “nueva gestión pública” y redundante en una despolitización del Estado. La misión de la función pública “(...) no es representar a la población o ser la entidad que condense las fuerzas sociales del país”<sup>38</sup>, sino proveer servicios eficientemente sobre la base de un conocimiento técnico-científico. Esta visión es cultivada desde los distintos ámbitos de producción y circulación de la carrera tecnocrática: las universidades privadas (especialmente la Pontificia Universidad Católica del Perú), las consultoras o *think tanks* de economía, el sector privado (particularmente la banca comercial), las instituciones financieras internacionales y las áreas económicas del sector público. Estos espacios permiten a los tecnócratas consolidarse como gru-

<sup>35</sup> Grompone, 2017, pp. 155-163.

<sup>36</sup> Banco Mundial, 2011.

<sup>37</sup> Grompone, 2017, p.171.

<sup>38</sup> *Ibidem*. p. 172.

po, formar redes y vincularse con agentes externos al aparato estatal, hasta ser capaces de gestar y reproducir sentidos comunes tecnocráticos en diversos lugares del Estado, allende los cambios de gobierno.

Ahora bien, este sentido común tecnocrático funciona mejor a nivel central que subnacional y más a nivel de las ideas que de la práctica. Diversos estudios demuestran que, más allá de la búsqueda de la eficiencia, los diseños tecnocráticos traducidos en normas y procedimientos de rango ministerial, van perdiendo coherencia y tecnicidad a medida que van implementándose en niveles más bajos del Estado y en instancias subnacionales. En la práctica, el funcionamiento de las instituciones públicas responde a lo que Gálvez denomina un sistema de operación emprendedor competitivo, según el cual, "(...) las empresas compiten por licitaciones, los consultores por los contratos y los ciudadanos y las entidades estatales por convertirse en una prioridad presupuestal para el Ministerio de Economía y Finanzas."<sup>39</sup> Se consolida así un esquema de gobierno en el cual "(..) ante la precariedad de las demás alternativas de desarrollo, el universo de la inversión pública se constituye en el ámbito idóneo para el desarrollo de estrategias de progreso personal y empresarial".<sup>40</sup>

La expansión de esta lógica sistémica de disipación de límites entre lo público y lo privado, explica en buena parte la llegada a la presidencia de un candidato con el perfil de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), personaje emblemático de las reformas neoliberales,<sup>41</sup> ministro y asesor económico del Estado peruano en los gobiernos de Belaúnde Terry (1980-1985) y Alejandro Toledo (2001-2006), quien complementa su currículo con el trabajo para el sector privado en diversas partes del mundo. PPK inició su carrera profesional en el Banco Mundial, como economista regional para América Central, y a partir de allí trabajó para distintas firmas dedicadas a la banca de inversión y la minería, entre otros rubros. Completa su talante empresarial su condición de accionista de diversas firmas peruanas y extranjeras, miembro de directorio de otras y en ocasiones consultor, incluyendo el trabajo de lobista para algunas empresas con las que antes celebró contratos. Kuczynski ha estado así a ambos lados de la mesa y,

<sup>39</sup> Gálvez, 2017. p. 31.

<sup>40</sup> *Idem.*

<sup>41</sup> Kuczynski es coautor con John Williamson del libro *Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina* (2003), donde consideraba urgente revisar las políticas desarrolladas en los años noventa para profundizarlas. Williamson, es conocido por ser el padre intelectual de la expresión "Consenso de Washington", mientras que Kuczynski participó con Bela Balassa, Gerardo Bueno y Mario Enrique Simons en el libro del Institute for International Economics de 1986, *Toward Renewed Economic Growth in Latin America*, que marcó un hito en el cambio de las políticas económicas de la región.

como se constató con el escándalo de Odebrecht que lo llevó a la renuncia, en ocasiones al mismo tiempo. Es así un hombre de negocios que actúa intermitentemente, y sin límites temporales claros, en la esfera pública.

Con Kuczynski, la tecnocracia gobernó por primera vez por sí misma consolidando la presencia lograda tanto en gobiernos autoritarios como de centro. Junto a *think tanks* como el Instituto Peruano de Economía (IPE), el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y el Instituto Libertad y Democracia (IDL), la tecnocracia ha diseñado desde hace años las políticas públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MCYT) y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el abismo que separa a las lógicas tecnocráticas de las prácticas burocráticas y políticas mostró a los defensores del libre mercado la necesidad de ejercer directamente el poder como único modo de garantizar el arribo definitivo de la segunda ola de reformas estructurales. Este fue precisamente el proyecto de gobierno trazado por Kuczynski: corregir los errores de las políticas económicas de los años noventa y llevar a término aquellas reformas incompletas, tanto por los escasos progresos en la reforma del mercado de trabajo o del sistema fiscal como por las instituciones existentes que no permitieron obtener los beneficios esperados de las reformas.

La importancia de la agenda económica de PPK contrastó con el abandono de políticas de justicia, memoria y derechos humanos en un discurso que buscó "hacer las paces" con el pasado. La declaración del 2018 como "Año de la Reconciliación Nacional", fue el corolario de un nuevo consenso entre las derechas (autoritaria, tecnocrática y conservadora) en torno al negacionismo y el olvido. La idea de darle vuelta a la página ahondó la injusticia y las secuelas de la guerra, yendo a contracorriente de la construcción de una memoria colectiva. Visto a la luz del indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori, el llamado a la "reconciliación" de PPK no fue más que el eufemismo para una política de la impunidad y desmemoria que, no solo no apuntó a la reintegración, sino que profundizó las distancias entre los peruanos.

Después de veinte meses, el gobierno de PPK terminó manchado por acusaciones de corrupción, revelaciones de relaciones indebidas entre autoridades políticas, técnicos e intereses privados en los últimos años, y su renuncia precipitada denotó los límites políticos de un manejo tecnocrático del Estado. Tras su salida, el nuevo presidente, Martín Vizcarra, ha intentado ganar el apoyo del fujimorismo para adelantar las reformas pendientes. En mayo de este año presentó al Congreso un proyecto de ley en el que solicitó facultades especiales para legislar en seis áreas noda-

les.<sup>42</sup> Mientras tanto, el jefe del gabinete, César Villanueva, anunció que una de las acciones inmediatas del nuevo gobierno sería eliminar la “grasa del Estado” a través de medidas de austeridad en el aparato público.<sup>43</sup>

La atención de Vizcarra pronto tuvo que desplazarse de la agenda económica a la política ante el destape de la trama de corrupción, tráfico de influencias y favores en las altas esferas de la judicatura, de la que participaban tanto magistrados como políticos y empresarios. En su discurso por las fiestas patrias, el pasado 28 de julio, el mandatario propuso la realización de un referéndum para consultar al pueblo acerca de la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la prohibición de la reelección inmediata de presidente y congresistas, el financiamiento privado de los partidos políticos y campañas electorales y el retorno a un sistema bicameral sin aumento de parlamentarios, en un intento por devolver la credibilidad perdida a las instituciones políticas. El destino del referéndum es incierto, teniendo en cuenta que el Congreso, en su mayoría fujimorista y salpicado con el escándalo en ciernes, estaría poco dispuesto a adelantar cambios que reduzcan su influencia sobre el CNM e impidan la reelección de sus representantes.

El acotado margen de maniobra de Vizcarra para impulsar cambios profundos en la economía y el sistema político ya impacta su popularidad entre los peruanos. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional urbano-rural de la consultora GFK (*Growth for Knowledge*) para el diario *La República*, un 56% de los encuestados desapruueba la gestión del mandatario y solo un 37% lo considera confiable. Entre tanto, el tono sumiso y conciliatorio con el que quiso mantener en un comienzo su relación con el fujimorismo tiende a difuminarse con su propuesta de referéndum, al tocar temas sensibles para Fuerza Popular, y para toda la clase política tradicional. Tras el anuncio presidencial, legisladores de las distintas bancadas le han respondido a Vizcarra señalando su desacuerdo con la propuesta de prohibir su reelección. Desde la izquierda, representada en el Congreso por el Movimiento Nuevo Perú y el Frente Amplio, se habla de “una crisis de régimen” y se exige ir más allá de algunas reformas, demandando la convocatoria a una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución heredada de la dictadu-

<sup>42</sup> i. Tributaria y financiera, ii. gestión económica y competitividad, iii. reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, iv. integridad y lucha contra la corrupción, v. prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y vi. modernización de la gestión del Estado.

<sup>43</sup> El mismo mes fue aprobado el Decreto de Urgencia N° 005-2018 mediante el cual el gobierno realizó un recorte de S/ 970 millones en cuatro carteras: Interior (S/ 100 millones), Educación (S/ 208 millones), Salud (S/ 187 millones) y Transportes (S/ 111 millones).

ra fujimorista. Sujeta a la decisión del Congreso, la reforma política y judicial propuesta por Vizcarra se encuentra aún lejos de concretarse.

Otro frente de disputa entre Vizcarra y el fujimorismo se abrió con motivo de los textos escolares de historia y educación sexual editados por el Ministerio de Educación (MINEDU). En los textos escolares que fueron repartidos en algunos colegios, aparecen lecturas que promueven ideas como “la virginidad conservada”, “podemos resistir la tentación” y otros de carácter homofóbico que, al parecer, fueron incluidos en el diseño curricular como producto de las reuniones sostenidas por el MINEDU y miembros de la bancada de Fuerza Popular, integrantes del movimiento “Con mis hijos no te metas”, exfuncionarios del gobierno de Alberto Fujimori y miembros del Opus Dei. El presidente Martín Vizcarra dijo no estar de acuerdo con el contenido que aborda temas de sexualidad con enfoque conservador y fundamentalista de tipo religioso, y señaló la necesidad de cambiarlos y corregirlos. Aunque en apariencia el impase fue resuelto y los contenidos revisados y reformulados, la cuestión de fondo que enfrenta la derecha liberal es el renovado y fortalecido papel de los sectores conservadores y religiosos en la política peruana. A este fenómeno nos referiremos a continuación.

### **La derecha conservadora y religiosa**

Perú es uno de los países con mayor población católica y evangélica en América Latina. Este solo factor no explica, empero, la creciente participación pública de los grupos conservadores y su interés de integrarse en la política formal del país en los últimos veinte años. El giro político-partidario de los grupos conservadores coincide con el cambio de posiciones de la Iglesia en relación con el Estado y la sociedad: si en el pasado estos grupos (al menos los católicos) pertenecían directamente a la estructura formal del Estado y a las élites que lo controlaban, tras las dictaduras de los años setenta y el proceso de democratización de los últimos veinte años, se produjo un marcado deterioro en su capacidad de influencia que los obligó a idear nuevas maneras de penetrar el campo de la política. En el caso de los evangélicos, su irrupción en las elecciones de 1990 acentuó la incorporación del factor religioso como un elemento capital en las tendencias electorales y en el ejercicio del poder en la política nacional.

Antes de avanzar en la descripción de la derecha conservadora conviene advertir que no todos los actores religiosos están relacionados con la agenda conservadora. El mundo religioso peruano se caracteriza

por su diversidad ideológica.<sup>44</sup> Aun así, en materia de articulación con la esfera partidaria, los conservadores llevan la ventaja, orientándose estratégicamente a la penetración de la agenda pública y legislativa. Al mismo tiempo, estos sectores se articulan en organizaciones de la sociedad civil, que no solo se vinculan con grupos religiosos, sino que también tienen intereses ligados a diversas políticas públicas. El nuevo activismo conservador busca contrarrestar la avanzada de los grupos de feministas, activistas LGTBI y diferentes movimientos pro-elección. De este modo, aunque mantienen una relación estrecha con la Iglesia, han comprendido que esta no es la única vía, ni tampoco la más eficiente, a la hora de movilizar sus demandas, y han empezado a utilizar estructuras paralelas de lobby institucional, presión política y difusión, que complementan su labor. Los grupos conservadores provida, por citar un ejemplo, han intentado penetrar el campo político (y muchas veces lo han conseguido) pasando por diferentes transformaciones.

Como revela la investigación del antropólogo peruano Jaris Mujica, un eje del discurso común se mantiene invariable a la diversidad de actores que convergen en el movimiento conservador: “formas de separación y exclusión de lo diferente”. Los binomios bueno-malo, normal-anormal, correcto-desviado, etcétera, construyen el orden social maniqueo a partir del cual disponen las interioridades e intentan delimitar la subjetividad. Abroquelados en torno a los discursos religiosos, los grupos conservadores han utilizado diferentes estrategias para difundir y readaptar sus discursos sobre la naturaleza de ciertas prácticas, hasta penetrar las redes del poder político y económico, con relativo éxito. Mujica identifica cuatro tipos de estrategia: i. la naturalización del discurso religioso en una demanda de totalidad: “(...) esto es así porque así lo dice Dios y porque así lo dice la iglesia (...)”; ii. la reconstitución del discurso científico ilustrado y su difusión entre los saberes sociales para reestructurar las formas conservadoras de pensar la ciencia y producir discursos pseudocientíficos sobre la verdad; iii. la defensa de la familia (heterosexual, monogámica y con mandato reproductivo) como núcleo articulador de sus acciones; y iv. la articulación del trinomio familia-Iglesia-Estado, como mecanismo de penetración en la sociedad civil y en la esfera pública.<sup>45</sup>

Este último trinomio se ha hecho patente en el activismo en contra de la apertura de los derechos sexuales y reproductivos, pero también en la inserción de personajes y miembros de agrupaciones evangélicas y

<sup>44</sup> Así por ejemplo, en las pasadas elecciones presidenciales un grupo de evangélicos emitió un pronunciamiento en el que expresaba su respaldo a la candidatura de la izquierdista Verónica Mendoza (Cristianos y cristianas con Verónica).

<sup>45</sup> Mujica, 2007.

provida en los aparatos políticos formales y otras instituciones poderosas e influyentes del terreno social. Desde posiciones estratégicas en el ámbito público, los conservadores buscan desplegar sus dispositivos de "normalización". El resultado, concluye Mujica, es un aparato organizado que articula el discurso habitual de la familia con la disposición de un mandato divino, primigenio e indubitable, basado en fundamentos axiomáticos sobre ciertos temas, como la mentada defensa de la vida. Es a partir de esta disposición que plantean un mecanismo de penetración del Estado y sus instituciones: la inserción de sus miembros y la generación de políticas, leyes y normas para la defensa de sus principios.

En términos de instituciones, la derecha conservadora peruana se arraiga en cinco núcleos principales. El primero, es el Centro de Promoción Familiar y de Regulación de la Natalidad (CEPROFARENA), fundado en 1981 y relacionado con *Human Life Internacional* (HLI), una poderosa organización internacional de conservadores. CEPROFARENA cuenta entre sus miembros a reconocidos médicos del país y a poderosos agentes estatales (como el exministro de Salud, Fernando Carbone) que han querido investir de científicidad al discurso conservador. Como describe en su blog, CEPROFARENA trabaja en la difusión del método de Ovulación *Billings* (que implica la abstinencia de las relaciones sexuales en periodos de fertilidad) y otros "métodos naturales", dada su oposición a la píldora del día siguiente y otros anticonceptivos que "irrespetan" el mandato reproductivo.<sup>46</sup> En este sentido, los miembros de CEPROFARENA asumen que quienes no se reproducen biológicamente (las parejas homosexuales por ejemplo) o quienes "no permiten la llegada del niño por nacer" (a través de métodos anticonceptivos, aborto, etcétera) serían "(...) parte de una campaña de destrucción de la sociedad".<sup>47</sup> La importancia de esta organización radica en que ha logrado reunir a los "provida" a través de un Congreso Internacional que, en el año 2005, logró la redacción de la "Declaración de Lima", un manifiesto concertado de la red internacional de conservadores provida.<sup>48</sup>

El segundo núcleo de conservadores está centralizado en la Oficina para Latinoamérica del *Population Research Institute* (PRI) con sede en Lima. El PRI tiene funciones que complementan la acción de su oficina central en los Estados Unidos, dirigidas a impedir que las organizaciones en pro de los derechos sexuales y reproductivos, la promoción del uso de anticonceptivos o las campañas de control de-

<sup>46</sup> CEPROFARENA, 2018.

<sup>47</sup> PROMSEX Perú, 2007.

<sup>48</sup> Declaración de Lima, 2005.

mográfico, logren financiamiento nacional e internacional. Sus principales actividades son el lobby en organizaciones del Estado, la asesoría parlamentaria y legislativa y la búsqueda de aliados de trayectoria internacional en la construcción de una Cultura de Vida para fundar Vida Familiar Internacional (Family Life International-FLI).<sup>49</sup>

Un tercer núcleo, orientado a la educación escolar, se aglutina en torno a la Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA), fundada en Venezuela y extendida por casi toda Latinoamérica. Los intereses de ALAFA están centrados en la promoción de la familia clásica (monogámica, heterosexual y con mandato reproductivo), a través de la educación sexual y religiosa, a partir de la cual se espera moldear a niños, jóvenes y futuras familias en un "sana sexualidad que previene de los desvíos". Su actividad editorial se dirige así a la producción de libros escolares que difunden en colegios privados y estatales, los cuales contienen ideas referidas a la negativa al uso de anticonceptivos, aborto, matrimonio homosexual, y un discurso sistemático de control del cuerpo: abstinencia, el sexo como reproducción, etcétera.<sup>50</sup>

El cuarto núcleo de la derecha conservadora es el Opus Dei que, si bien funciona en el Perú desde 1953, ha acrecentado su poder desde el nombramiento de Juan Luis Cipriani como cardenal de Lima. La "Obra" es una Prelatura Personal, lo que le da independencia pues rinde cuentas directamente al Papa. El Opus Dei se ha desarrollado también en otros espacios fuera de la Iglesia, logrando una extraordinaria capacidad de presión dentro del Estado. Al conocido vínculo entre Monseñor Cipriani y el Fujimorismo, se suma un papel destacado de la "Obra" en la formación de niños y jóvenes, en sus colegios y universidades, y una importante labor social a través de proyectos de desarrollo local. La actitud de desdén mostrada por Cipriani hacia las organizaciones de derechos humanos es ya conocida. A estas se ha referido despectiva y groseramente como "esa cojudez". Su discurso guarda coherencia a lo largo del tiempo: partidario de la pena de muerte, defensor y justificador de las muertes, desapariciones y abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en el conflicto armado contra Sendero Luminoso; y sospechoso mediador en la toma de la embajada de Japón por el Movimiento Tupac Amarú que terminó en la masacre de 14 emerretistas, dos militares y un civil. El objeto más reciente de sus invectivas ha sido el movimiento de despenalización del aborto a cuyos defensores espetó: "Si no estás de acuerdo con la vida, suprime la tuya."<sup>51</sup>

<sup>49</sup> *Popular Research Institute*, 2018.

<sup>50</sup> ALAFA, 2018.

<sup>51</sup> El Nuevo Diario (5 de mayo de 2018).

Finalmente, merece destacarse el núcleo evangélico. En el proceso electoral reciente, figuras emblemáticas del conservadurismo evangélico, como los pastores Humberto Lay y Julio Rosas, se posicionaron en el partido Alianza por el Progreso (APP). Aunque el primero renunció en medio de los escándalos que han afectado este movimiento político, es claro que las fuerzas conservadoras eligieron este grupo como el principal vehículo para acceder al poder. Recientemente, Rosas anunció la compra de un kit electoral y su interés por crear un partido político conservador bajo el nombre de Acción Cristiana de cara a las elecciones presidenciales del 2021. Cristian Rosas, hijo del congresista, señaló que todavía no han empezado la labor de recolección de firmas, pero que ya cuentan con un “trabajo de campo” consolidado por el acercamiento que han tenido con organizaciones civiles como “Con mis hijos no te metas” y la “Coordinadora Nacional Pro Familia”, entre otras. Además, estarían buscando apoyo en sectores más allá de congregaciones evangélicas, como la Alianza Cristiana Misionera (de la cual son parte Julio Rosas y su hijo) e incluso sectores de la Iglesia Católica.

A la fecha se conservan vigentes dos agrupaciones encabezadas por políticos que también buscaron liderar movimientos religiosos. Una de ellas es Restauración Nacional con Humberto Lay como presidente, la cual mantiene su inscripción desde noviembre del 2005. La otra es el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPA), encabezado por Jonás Ataucusi. Otras congregaciones evangélicas como el Movimiento Misionero Mundial (MMM) solo se han limitado a mostrar su respaldo a partidos políticos existentes, como ocurrió con Fuerza Popular en las últimas elecciones presidenciales. “Agua Viva” fue un poco más allá con su respaldo a Keiko Fujimori y cuenta con un representante en fujimorista en el Congreso, Juan Carlos Gonzáles. La representación evangélica en el Congreso incluye a otros tres parlamentarios: Tamar Arimborgo y Glider Ushñahua (ambos de Fuerza Popular) y Moisés Guía (de Peruanos por el Cambio). Estos actores conservadores han logrado una atención mucho más constante por parte de la opinión pública, aparte de “normalizar” la relación evangelismo-conservadurismo político. Al mismo tiempo han convertido a los grupos evangélicos en objetos apetecidos por los partidos de centro y derecha que encuentran en su feligresía un importante capital electoral.<sup>52</sup>

Los distintos núcleos de la derecha conservadora ponen de manifiesto la importancia creciente del cuerpo reproductivo en la agenda política y la operativización de lógicas de control social, poblacional y subjetivo bajo el nebuloso concepto de “defensa de la vida”. Un movimiento ambivalente pone en suspenso el carácter absoluto del mandato provida: mientras el discurso

<sup>52</sup> *El Comercio* (8 de julio de 2018).

externo gira sobre el tema de la vida, la sexualidad y el cuerpo, en el espacio de la vida cotidiana sigue manteniendo con fuerza formas de exclusión de los "otros diferentes" (las mujeres, los niños, los pobres, los originarios y los descendientes afro). De ahí que, como acertadamente analiza Mujica, "más que un punto de llegada, la reflexión sobre la vida como símbolo y elemento del discurso es una puerta de acceso para comprender los sistemas de organización, de tecnologías políticas y de los saberes que estos grupos y estos actores movilizan en la esfera social pública y privada".<sup>53</sup>

## Conclusión

En un contexto de crisis de representación y pérdida de legitimidad de los partidos ante el electorado, la clase política peruana se resiste a ser descrita en función de los análisis de antaño, más proclives a observar su organización partidista, hoy altamente volátil e indisciplinada, o sus plataformas programáticas, que operan giros de 180 grados según sean tiempos de campaña o de gobierno. Por su parte, la participación indiscriminada de las distintas fuerzas políticas en hechos de preocupante opacidad se traduce en una sensación de hastío generalizado entre la población que termina allanando las diferencias entre los distintos actores. Expresiones típicas como "que se vayan todos", comprensibles desde la óptica de una ciudadanía que se percibe como antipolítica, ocultan las líneas ideológicas que dan sentido a los distintos liderazgos y agrupaciones partidarias.

Lejos de constituir un bloque homogéneo, la derecha peruana alberga posturas diversas y hasta contradictorias. En nuestro trabajo hemos dado por sentada la utilidad de la distinción derecha/izquierda para avanzar en la caracterización de tres tendencias o ramificaciones que, si bien no agotan la totalidad de este lado del espectro, permiten identificar sus principales rasgos y representantes: la derecha autoritaria y clientelar, la derecha tecnocrática y la derecha conservadora y religiosa.

En tiempos en los que la democracia parece ser una "idea común", los diferentes movimientos y agrupaciones sociales han tenido que reordenar sus discursos con nuevas estrategias que se adapten a dicho contexto (o al menos den la apariencia de hacerlo). Los movimientos de derecha, no son una excepción. Han tenido que reinventarse en este proceso y generar nuevos mecanismos que les permitan insertarse en el juego político y social. En algunas ocasiones más movidos por las encuestas y los escándalos, y en otras, con cierta consistencia respecto de un núcleo ideológico.

<sup>53</sup> Mujica, 2007, p. 58.

Aunque el fantasma autoritario acecha a la vuelta de la esquina, la sociedad peruana ha aprendido de sus errores, fortaleciéndose en la defensa de ciertos mínimos democráticos. Ha aprendido a descreer del mesianismo autoritario tanto como del eficientismo tecnocrático, de la intolerancia fundamentalista como del crecimiento sin equidad. Queda por ver qué de estas lecciones se traducirá en un cambio futuro más allá de las derechas o mejor, a pesar de ellas.

Fecha de recepción: 10 de agosto de 2018

Fecha de aprobación: 16 de enero de 2019

## Bibliografía

- Aquino, M. (5 de abril de 2016). Keiko Fujimori enfrenta a su mayor enemigo en elecciones de Perú: su apellido. *Reuters*, recuperado de <https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN0X225V>
- Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado [APEIM] (2016). Niveles socio-económicos. *APEIM*, recuperado de <http://www.apeim.com.pe/wpcontent/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf>
- Ballón, A. (2014). El caso peruano de esterilización forzada: Notas para una cartografía de la resistencia. *Aletheia*, 5(9), recuperado de <http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-9/dossier-de-genero/el-caso-peruano-de-esterilizacion-forzada.-notas-para-una-cartografia-de-la-resistencia>
- Banco Mundial (2011). Perú en el umbral de una nueva era. *Banco Mundial*, recuperado de <http://www.bancomundial.org/es/country/peru/publication/peru-umbral-nueva-era>
- Burt, J. M. (2009). *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori*. Lima: IEP- Asociación SER.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación [CVR] (2003). *Informe de la Comisión de verdad y reconciliación*, Tomo I. Lima: CVR.
- Conaghan, C. (1998). Stars of the crisis: The Ascent of Economist in Peruvian Public Life. En M. A. Centeno y P. Silva (comps.), *The politics of Expertise in Latin America*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Cotler, J. y Grompone, R. (2000). *El fujimorismo. Ascenso y caída de un régimen autoritario*. Lima: IEP.
- Degregori, C. I. y Rivera Paz, C. (1993). *Perú 1980-1993. Fuerzas Armadas, subversión y democracia. Redefinición del papel militar en un contexto de violencia subversiva y colapso del régimen burocrático*. Lima: IEP.
- Degregori, C. I. (2016). *La década de la antipolítica: Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima: IEP.
- De Soto, F. (1986). *El otro sendero*. Lima: Editorial el Barranco.
- Gálvez, Á. (2017). Emprendedores de Estado: El Sistema Nacional de Inversión Pública y el surgimiento de los "perfileros" en los gobiernos locales. En A. Gálvez y A. Grompone, *Burócratas y tecnócratas. La infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI* (pp. 20-96). Lima: IEP.

- Grompone, Á. (2017). La inacabable búsqueda de eficiencia: claves para entender las agendas tecnocráticas en el Perú actual. En A. Gálvez y A. Grompone, *Burócratas y tecnócratas. La infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI* (pp. 99-213). Lima: IEP.
- Ilizarbe Pizarro, C. (2015). Memoria, olvido y negacionismo en el proceso de recomposición política en el Perú de la posguerra del siglo XXI. En L. Huber y P. del Pino (eds.), *Políticas en Justicia transicional. Miradas comparativas sobre el legado de la CVR* (pp. 231-259). Lima: IEP.
- Jara, U. (2017). *Ojo por ojo. La verdadera historia del grupo Colina*. Lima: Planeta.
- Jaramillo, G. (5 de junio de 2016). El legado Fujimori. *El Comercio*, recuperado de <http://www.elcomercio.com/opinion/legado-fujimori-keiko-peru-presidente.html>
- Kanashiro Fonken, G. (8 de junio de 2018). Los evangélicos se reagrupan con miras al 2021. *El Comercio*, recuperado de <https://elcomercio.pe/politica/evangelicos-reagrupan-miras-2021-informe-noticia-524750>
- Kuczynski, P. y Williamson, J. (2003). *Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- Levitsky, S. (4 de junio de 2016). Anatomía de una renovación vacía. *La República*, recuperado de <https://larepublica.pe/politica/944941-anatomia-de-una-renovacion-fallida>
- Meléndez, C. (2015). Los ejes de la derecha en el Perú preelectoral. En *Revista Argumentos*, 9(3), recuperado de <http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/articulos/los-ejes-de-la-derecha-en-el-peru-preelectoral/>
- Miranda, J. y Yemin, A. (2008). ¿Políticas de salud y salud politizada? Un análisis de las políticas de salud sexual y reproductiva en Perú desde la perspectiva de la ética médica, calidad de atención y derechos humanos. *Cadernos de Saúde Pública*, 24 (1), recuperado de [https://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0102-311X2008000100002](https://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008000100002)
- Mujica, J. (2007). *Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder*. Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
- Pasquel, E. (31 de enero de 2016). Keiko: "Yo de ninguna manera hubiera cerrado el Congreso". *El Comercio*, recuperado de <https://elcomercio.pe/politica/elecciones/keiko-manera-hubiera-cerrado-congreso-391809>
- Plan de Gobierno Fuerza Popular (2014). Recuperado de <https://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/2/7/127397.pdf>

Pereda, D. (1 de julio de 2018). Alan, Keiko y Kenji son los más rechazados y Vizcarra sigue cayendo. *La República*, recuperado de <https://larepublica.pe/politica/1270348-alan-keiko-kenji-son-rechazados-vizcarra-sigue-cayendo>

PROMSEX (2007). Los grupos conservadores en el Perú. *PROMSEX*, recuperado de <http://promsex.org/wp-content/uploads/2007/10/Losgruposconservadoresenelperu.pdf>

Redacción *El Comercio* (19 de abril de 2016). Keiko Fujimori: el perfil de sus votantes en segunda vuelta. *El Comercio*, recuperado de <https://elcomercio.pe/politica/elecciones/keiko-fujimori-perfil-votantes-segunda-vuelta-395082>

Redacción *El Nuevo Diario* (5 de mayo de 2018). Cardenal peruano pide a los defensores del aborto que "supriman su vida". *El Nuevo Diario*, recuperado de <https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/463121-peru-cardenal-defensores-aborto/>

Tafur, J. C. (29 de mayo de 2018). Fuerza Popular y el mercantilismo de los 'pobres'. *El Comercio* recuperado de <https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/fuerza-popular-mercantilismo-pobres-juan-carlos-tafur-noticia-523370>

Tapia, C. (1997). *Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Dos estrategias y un final*. Lima: IEP.

Vidal Carrasco, A. M. (2017). Nosotras no empezamos el fuego: de víctimas a incendiarias. Comentarios al libro 'La verdad de una mentira', de María Cecilia Villegas. *Lamula.pe*, recuperado de <https://anamariavidal.lamula.pe/2017/08/12/nosotras-no-empezamos-el-fuego-de-victimas-a-incendiarias/anamariavidalc/>

Villegas Otero, M. C. (2017). *La verdad de una mentira. El caso de las 300 esterilizaciones forzadas*. Lima: Planeta.

Zapata, A. (2016). *Pensando a la derecha*. Lima: Planeta.

### Sitios web

ALAFA (2018). Recuperado de <http://www.alafa.org/>

CEPROFARENA (2018). Recuperado de <http://ceprofarena.blogspot.com/>

Declaración de Lima (2005). Recuperado de <https://noalabortoenelperu.wordpress.com/2009/11/14/declaracion-de-lima/>

Population Research Institute (2018). Recuperado de <https://www.pop.org/population-research-institute-expande-su-actividad-incorporandose-en-la-fundacin-de/>